

CUBA

RESUMEN EJECUTIVO

Cuba es un estado totalitario encabezado por Raúl Castro, que ocupa los cargos de Jefe de Estado, Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En el 6º Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar en abril, los delegados también eligieron a Castro al cargo de Primer Secretario del Partido. La constitución establece que el Partido Comunista (PC) es el único legal y “es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Las elecciones legislativas de 2008 no fueron libres ni justas. La Comisión Nacional de Candidaturas, adscrita al Partido Comunista, aprueba de antemano a todos los candidatos y ninguno de los 614 diputados de la legislatura tuvo oposición electoral. Las fuerzas de seguridad están supeditadas al ejecutivo nacional, en el que están representados los militares.

Las principales infracciones de los derechos humanos que han ocurrido en Cuba han sido las siguientes: menoscabo del derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno; empleo de amenazas oficiales, intimidación, turbas, hostigamiento y detenciones para impedir que los ciudadanos se reunieran pacíficamente, y un aumento considerable de las detenciones breves, las cuales alcanzaron en diciembre el mayor número mensual de los últimos 30 años.

Además, han continuado otras infracciones de los derechos humanos: golpizas, condiciones de encarcelamiento muy duras, enjuiciamientos entablados sin objetividad y la denegación de juicios justos. Las autoridades se interferían en la vida privada y estaba generalizada la vigilancia de las comunicaciones privadas. El gobierno también imponía serias limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, restringía la libertad de circulación y limitaba la libertad de culto. El gobierno se negaba a reconocer a las agrupaciones independientes de defensa de los derechos humanos o a permitirles que funcionaran legalmente. Además, el gobierno seguía restringiendo gravemente los derechos de los trabajadores, entre ellos, el derecho a formar sindicatos independientes.

La mayoría de las infracciones de los derechos humanos consistían en actos oficiales cometidos por orden del gobierno; por consiguiente, los malhechores gozaban de impunidad.

Sección 1 Respeto por la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometido a:

a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

No se tuvo conocimiento de que el gobierno ni sus agentes cometieran homicidios arbitrarios ni ilegales.

b. Desapariciones

No hubo informes sobre desapariciones por motivos políticos.

c. Torturas y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe el trato injurioso de los detenidos y presos. Sin embargo, han llegado informes comprobados de que las fuerzas de seguridad hostigan y a veces atacan física e impunemente a los defensores de los derechos humanos y de la democracia, a los disidentes y otros detenidos, y a los presos. Algunos detenidos y presos fueron sometidos a malos tratos físicos, a veces a manos de otros reclusos pero con la anuencia de los guardias, o a largos períodos de encierro en celdas de aislamiento.

Han llegado numerosos informes de ataques de la policía contra los detenidos, o de casos en que la policía se limitaba a observar, o incluso dirigía, los ataques de turbas organizadas por el gobierno contra los manifestantes pacíficos.

También han sido frecuentes los informes sobre los castigos a golpes de los presos por funcionarios de las cárceles o por otros presos. También han llegado noticias de ataques sexuales entre presos, generalmente debidos a la falta de vigilancia de los guardias; se ha recibido por lo menos un informe acerca de una violación perpetrada por los guardias.

Las condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las condiciones carcelarias seguían siendo muy duras. En las celdas faltaban el agua, la higiene, el espacio, la luz, la ventilación y el control de la temperatura adecuados. Si bien el Estado proporcionaba los elementos más esenciales de la alimentación y la asistencia médica, muchos presos dependían de los paquetes que les enviaba la familia para la comida y otras necesidades fundamentales. Muchas veces faltaba el agua potable. Las celdas en los presidios estaban hacinadas, lo que obligaba a los presos a dormir en el suelo y les limitaba el movimiento durante el día. Los presos a menudo dormían en literas de cemento sin colchones; al parecer, a veces más de una persona dormía en una litera angosta. Cuando había colchones, estos eran muy delgados y a menudo estaban infestados de plagas. Según los reclusos, había con frecuencia ratas, cucarachas, pulgas, piojos, chinches, hormigas picantes, moscas y mosquitos. Según los presos, no tenían acceso a asistencia médica y dental, incluso la de urgencia. A lo largo del año hubo varias declaraciones de huelga de hambre entre los presos, a fin de reclamar mejor asistencia médica.

Los presos, sus familiares y las organizaciones no gubernamentales (ONG) han informado acerca de la asistencia médica insuficiente, que ha causado o agravado muy diversas dolencias. Los presos también han informado sobre brotes de dengue, tuberculosis y hepatitis. El personal sanitario de las cárceles hacía uso repetido de las mismas jeringuillas, aunque entre los reclusos hubiera brotes de enfermedades transmisibles.

Han llegado numerosos informes de muertes en los presidios por ataques cardíacos o asmáticos, o por VIH/SIDA u otras afecciones crónicas, así como por suicidio.

El gobierno no ha dado a conocer el número de presos ni de detenidos. Tampoco ha informado sobre el número ni la ubicación de los centros de detención, los cuales comprenden no sólo las prisiones sino también los campamentos de trabajo y otros reclusorios.

De fuentes extraoficiales han llegado cálculos muy dispares sobre la población de los presidios y centros de detención; variaban entre 30.000 y 80.000 personas. El 23 de diciembre, el presidente Castro anunció que conmutaría las condenas de más de 2.900 presidiarios. Antes de fin de año, las autoridades liberaron a esos reclusos en las poblaciones donde habían residido.

Los hombres y las mujeres ocupaban distintos presidios e instalaciones de detención policial. Las mujeres manifestaban que sus condiciones eran tan deficientes como las de los hombres. Además, las mujeres denunciaban la falta de productos de higiene femenina y de cuidados prenatales adecuados. El gobierno no ha revelado información alguna sobre el trato que se daba a los menores en las prisiones y centros de detención de juveniles y adultos. Ha llegado información de que en las cárceles de máxima seguridad había jóvenes de apenas 15 años de edad.

No hubo diferencias de trato carcelario entre los disidentes políticos y los delincuentes comunes. Por negarse a usar los uniformes corrientes de los reclusos, a los presos políticos se les denegaban a menudo ciertos privilegios, por ejemplo, el acceso a las bibliotecas de los presidios y las mitigaciones acostumbradas a la severidad de las condenas (por ejemplo, el traslado de prisiones de máximo rigor a las de mediano rigor o a campamentos de trabajo.) A veces se encarcelaba a los presos cuerdos en las mismas celdas que a los perturbados. Los presos políticos también han informado que los otros reclusos a veces los amenazaban u hostigaban, supuestamente por orden de las autoridades carcelarias.

Según los presos, la incomunicación era el castigo común de la mala conducta; algunos de ellos se vieron aislados durante meses o incluso años por cada castigo. Tras su liberación en marzo, José Daniel Ferrer informó que había permanecido incomunicado durante la mayor parte de sus ocho años de reclusión. Por lo general, se restringían las visitas familiares a los presos incomunicados.

Los presidiarios y los detenidos preventivamente tenían derecho a recibir visitas; sin embargo, los familiares de algunos presos políticos han manifestado que las autoridades carcelarias a veces anulaban arbitrariamente algunas de las visitas previstas.

Se permitía a los presos cierta observancia religiosa. Según han informado tanto la Iglesia Católica como el Consejo de Iglesias de Cuba el acceso a los presidiarios ha mejorado durante el año; en la mayoría de las provincias, si no en todas, había servicios religiosos en los presidios. Han llegado informes aislados de que las autoridades de ciertos presidios no informaban a los reclusos del derecho que tenían a la asistencia religiosa, se demoraban meses antes de responder a esas peticiones y limitaban las visitas a un máximo de dos o tres al año.

Por ley, los presidiarios y detenidos pueden solicitar la mejora de las condiciones carcelarias y la satisfacción de las infracciones de procedimiento, por ejemplo, cuando seguían recluidos después de transcurrido el período de la condena. Según los presos, las autoridades a menudo se negaban

a aceptar las quejas o no las atendían una vez presentadas. Sin embargo, la familia de un preso político informó que las autoridades centrales habían atendido sus quejas con respecto a las condiciones de vida en la cárcel, cuando las autoridades locales no lo habían hecho. En otro caso, las autoridades del gobierno central habían ordenado a las de una cárcel que no se retiraran los privilegios a un preso político que se negaba a llevar el uniforme de presidiario. No está claro que el gobierno haya investigado o seguido las quejas por las condiciones inhumanas. Si esas investigaciones hubieran ocurrido, los resultados no se han hecho públicos.

El gobierno no permitía que las asociaciones internacionales o nacionales de derechos humanos vigilaran independientemente las condiciones carcelarias y no autorizaba el acceso a los detenidos por las asociaciones humanitarias internacionales. Aunque el gobierno se había ofrecido en 2009 a autorizar la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre torturas y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el gobierno no ha cumplido esa oferta en el transcurso del año.

d. Arrestos o detenciones arbitrarias

Según el código de procedimiento penal, la policía tiene un derecho muy amplio a parar e interrogar a los ciudadanos, a pedir que muestren su documentación y a efectuar arrestos y búsquedas. La ley dispone que los agentes de policía presenten a los sospechosos un auto de detención firmado, en el que figuren las razones, la fecha y el lugar de toda detención en una comisaría de la policía, así como un registro de los efectos personales que se hayan incautado durante un registro policial. En la realidad, en general la policía solía incumplir estos requisitos durante los arrestos y registros. Las paradas y los registros arbitrarios han sido más comunes en las zonas urbanas y en los puntos de control oficiales situados a las entradas de las provincias y los municipios.

Los agentes de la policía y la seguridad a menudo se valían de detenciones breves para impedir que los presuntos opositores se reunieran libremente. Esas detenciones solían durar de varias horas a varios días. El 19 de octubre, la policía detuvo en Santa Clara a Mario Félix Lleonart, pastor bautista y gran crítico de la brutalidad policial, a quien tuvieron retenido durante 10 horas. Las detenciones a corto plazo aumentaron en el 99% con respecto a las de 2010, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). Durante el año, la CCDHRN contó 4.123 detenciones breves; en diciembre hubo 796 detenciones, el mayor número mensual en 30 años.

Han sido menos frecuentes las condenas largas de encarcelamiento contra los opositores pacíficos, pero ha seguido habiéndolas. En mayo, los hermanos Marcos Maikel Lima Cruz and Antonio Michel Lima Cruz fueron condenados a tres y dos años de reclusión, respectivamente, por desorden público y profanación de la bandera cubana. Fueron encarcelados después de una campaña violenta de hostigamiento, en la cual se lanzaron las turbas contra la residencia de la familia Lima para castigar su pacífica oposición política.

Además, el derecho cubano autoriza detenciones de hasta cuatro años aun antes de que se comita ningún delito, si se decide subjetivamente que el sospechoso presenta una “posible peligrosidad”. Esa ley se emplea principalmente para reprimir la conducta antisocial, por ejemplo, el consumo

abusivo de sustancias, pero también se ha utilizado para acallar a la oposición política pacífica. No se sabe exactamente cuánta gente estaba encarcelada por “peligrosidad” pero se ha calculado que excede de 3.000 personas.

El gobierno también restringía la libertad de reunión y para ello impedía que los ciudadanos salieran de sus residencias, bajo amenaza de arresto. Por lo general, unos policías sin uniforme se situaban cerca de la residencia para asegurarse de que no saliera el ciudadano hasta que hubiera terminado el acto público o la manifestación. Las autoridades pusieron a unas 40 personas bajo arresto domiciliario el 15 y 16 de octubre para evitar que asistieran a los funerales en honor de Laura Pollán, la fundadora de las Damas de Blanco.

Función de la policía y del aparato de seguridad

El Ministerio del Interior (MININT) controlaba la policía, las fuerzas de seguridad nacional y el sistema penitenciario. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR), adscrita al mismo ministerio, es el órgano coercitivo principal, el cual ha resultado moderadamente eficaz en la investigación de los delitos comunes. Las unidades especializadas del servicio de seguridad del Estado del MININT estaban encargadas de la vigilancia, infiltración y supresión de los grupos de oposición política. La PNR realizaba una función auxiliar, realizando allanamientos de domicilios, deteniendo a los buscados por el MININT y proporcionando instalaciones para los interrogatorios.

La policía solía infringir impunemente las leyes de procedimiento y a menudo no proporcionaba a los ciudadanos la documentación que se necesitaba legalmente o se negaba a proporcionarla, especialmente durante las detenciones y los registros arbitrarios. Las fuerzas de seguridad actuaban con impunidad en la comisión de numerosas infracciones graves de los derechos humanos y civiles.

El 5 de mayo, la policía golpeó al activista Juan Wilfredo Soto García mientras se encontraba esposado en una plaza pública de Santa Clara. Fue tratado en un hospital, donde se le dio de alta pero falleció a los tres días. El gobierno negó que hubiera muerto por los golpes que sufrió pero no ha publicado los resultados de la investigación que se efectuó acerca de su fallecimiento.

Aunque la ley de procedimiento penal prohíbe la coacción durante los interrogatorios de investigación, la policía y las fuerzas de seguridad empleaban habitualmente tácticas, amenazas y hostigamientos agresivos y físicamente injuriosos durante los interrogatorios. Según los detenidos, los agentes les amenazaban con arrestos prolongados, la pérdida de los derechos de tutela sobre los hijos, y la negativa del permiso de salida del país, entre otras amenazas, por ejemplo, recordarles que alguno de sus familiares ancianos pudiera sufrir un accidente. En septiembre, los agentes de la seguridad detuvieron a los opositores Yelena Garcés y a su esposo Miguel Rafael Cabrera, y les advirtieron que si seguían realizando actos de disidencia, el gobierno pudiera pasar a ejercer la tutela de su hijo de tres años.

No se disponía de mecanismos de fácil acceso para investigar los ultrajes del gobierno.

Los agentes secretos de la policía y del MININT estaban a menudo presentes cuando se interrumpían los intentos de reunión pacífica, para los cuales esos agentes se coordinaban con los jefes de las turbas (véase la sección 2.b.).

Muchos de los “actos de repudio” coordinados por el Estado se dirigían contra las Damas de Blanco. En diversas ocasiones en julio y agosto se organizaron esos actos de repudio para evitar que las Damas de Blanco desfilaran después de la misa en la provincia de Santiago. El 21 de octubre, y en contra de su pretensión de que esos actos de repudio eran espontáneos, el gobierno advirtió que haría uso de las turbas para impedir que las Damas de Blanco desfilaran pacíficamente el 24 de octubre. Anteriormente, las turbas y los agentes de seguridad habían atacado a Laura Pollán, la dirigente de las Damas de Blanco y a otras personas cuando intentaban salir de su casa.

Los procedimientos de arresto y el trato durante la detención

Según el código de procedimiento penal, después de una detención la policía tiene un plazo de 24 horas para presentar una denuncia penal a un instructor de la policía. El instructor tiene entonces 72 horas para investigar y preparar un informe para el fiscal. El fiscal cuenta con otras 72 horas para recomendar o no al tribunal pertinente la iniciación de una investigación penal. Los detenidos no tienen derecho a asesoramiento jurídico durante estos plazos.

Por ley, después de 168 horas de detención, se debe informar al detenido de la razón por la que ha sido arrestado e investigado; sólo entonces tiene derecho a la representación jurídica. Los detenidos que hayan sido enjuiciados deben contratar a un representante jurídico en el plazo de cinco días del enjuiciamiento; de lo contrario, el Estado puede nombrarles un abogado. Los enjuiciados pueden salir en libertad bajo fianza, quedar bajo arresto domiciliario o estar detenidos mientras continúa la investigación.

En la realidad, sin embargo, muchos de esos procedimientos a menudo no se cumplen. Con frecuencia, los sospechosos están detenidos más de 168 horas sin que se les informe de los motivos de la detención o se les proporcione un abogado. Por medio de una encuesta efectuada entre sus compañeros de reclusión en 2009 y 2010, un disidente conocido averiguó que el 64 por ciento de los que estaban en detención preventiva en su mismo penitencionario habían pasado semanas e incluso meses sin haber visto a un abogado y sin que se les informara de los cargos en su contra.

Una vez que el acusado cuenta con un abogado, la defensa tiene cinco días para responder a la acusación, después de lo cual se suele fijar la fecha del juicio. Han llegado muchos informes de que los acusados que tienen defensores públicos sólo se reúnen con sus abogados algunos minutos antes del comienzo del juicio. Los fiscales pueden requerir juicios sumarios “en circunstancias extraordinarias” y cuando se trata de delitos contra la seguridad del Estado.

La libertad bajo fianza es posible pero no se suele conceder en por la detención de opositores al gobierno. El tiempo que se pase recluido en espera de juicio se descuenta de la condena.

A los detenidos se les puede interrogar en cualquier momento mientras estén encarcelados y no tienen derecho a pedir la presencia de un abogado. Tienen derecho a guardar silencio pero los agentes no están obligados por ley a informarles de ese derecho.

Por ley, los investigadores deben concluir sus averiguaciones penales en el plazo de 60 días, pero los fiscales pueden concederles dos prórrogas de 60 días cada una, previa solicitud, de forma que los investigadores pueden contar con un total de 180 días para sus averiguaciones. Este plazo pudiera, sin embargo, prorrogarlo aun más el tribunal competente en “circunstancias extraordinarias” y previa solicitud especial del fiscal. En ese caso ya no quedan más requisitos jurídicos para concluir la investigación ni para enjuiciar al detenido. Esta excepción se ha utilizado a menudo. A los detenidos a veces se les ha tenido en reclusión por investigación durante meses o años, tanto en casos políticos como apolíticos. En los casos apolíticos las demoras se han debido en muchos casos a la ineficacia de la burocracia y a la falta de verificación de los excesos policiales, fiscales o judiciales.

e. Negación de juicio público e imparcial

La judicatura, aunque la Constitución establece su independencia, está directamente subordinada a la Asamblea Nacional, la cual puede destituir a los jueces o nombrarlos en cualquier momento. En realidad, la judicatura ha estado enteramente dominada por consideraciones de orden político, y el PC y el Consejo de Estado ejercen una influencia casi total sobre los tribunales y sus resoluciones.

Hay tribunales civiles a los niveles municipales, provinciales y de Corte Suprema. Se convocan tribunales especiales para enjuiciar a los opositores políticos (“contrarrevolucionarios”) y otras causas que se considera pudieran afectar a la “seguridad del Estado”; esos juicios tienen lugar a puerta cerrada. Los tribunales militares también tenían competencia sobre los civiles si alguno de los acusados pertenecía a las fuerzas armadas, las fuerzas policiales u otro servicio coercitivo.

Procedimientos judiciales

Todos los ciudadanos así como los extranjeros tienen derecho igual a las garantías legales, pero a menudo los tribunales no respetan esas garantías. La ley supone que el acusado es inocente a menos que se demuestre lo contrario pero en la realidad las autoridades con frecuencia no acataban ese principio; la carga de la prueba recaía más en la demostración de inocencia por la defensa que en la de culpabilidad por el fiscal.

Los acusados solían tener derecho a un juicio público; sin embargo, los juicios por motivos políticos a menudo se celebraban en secreto, como sucedía cuando se alegaban excepciones por delitos contra “la seguridad del Estado” o por “circunstancias extraordinarias”. La ley no prevé los juicios por jurado. Casi todas las causas se concluían en menos de un día.

La ley dispone que el acusado tiene derecho a estar presente en el juicio y exige que esté representado por un abogado, si es necesario a costas públicas. Los abogados de la defensa tienen derecho a preguntar a los testigos del Estado y a presentar testigos y pruebas de parte de

los acusados. Los únicos abogados autorizados a ejercer ante los tribunales penales estaban empleados en los estudios jurídicos colectivos del Estado.

Los criterios para la presentación de pruebas son a menudo arbitrarios y discriminatorios. Según numerosos informes, los fiscales suelen presentar pruebas improcedentes o inciertas para probar las intenciones del acusado o sus antecedentes revolucionarios. En un juicio que tuvo lugar en marzo, el cooperante extranjero Alan Gross fue acusado de “comprometer la soberanía nacional y la integridad territorial de Cuba” mediante la instalación del servicio de internet por satélite en unos centros de la comunidad judía; en ese juicio, el tribunal consideró como prueba el testimonio de un “perito” que dedujo las intenciones criminales de Gross por grafología, o sea, el análisis de su letra.

Los abogados defensores tienen derecho a examinar el expediente policial del acusado, a menos que la investigación entrañe “delitos contra la seguridad del Estado”. En este caso, los abogados defensores no tienen acceso al expediente mientras no se hayan formulado los cargos. En realidad, según informaban muchos detenidos, sus abogados encontraban dificultades en conseguir acceso a los documentos, a causa de obstáculos burocráticos y administrativos. Los abogados de los detenidos por motivos políticos informaban que a menudo hallaban aún mayores dificultades en tener acceso a los expedientes de sus defendidos.

El código penal define el concepto de “posible peligrosidad” como la “inclinación especial de una persona a cometer delitos, demostrada por una conducta en manifiesta contradicción con las normas socialistas.” En el juicio el fiscal sólo debe demostrar que el acusado tiene una “inclinación” a delinquir, de forma que no tiene que haber ocurrido un acto delictivo en sí. La pena puede ser de hasta cuatro años de reclusión. Las autoridades, por lo general, hacían uso de esta ley contra las prostitutas, los alcohólicos, los jóvenes que no se presentaban a los centros de trabajo, y los que reincidían en infringir las leyes que restringen el cambio de domicilio. Según calcula la CCDHRN, entre 3.000 y 6.000 personas estaban recluidas por “posible peligrosidad”.

La ley reconoce el derecho de apelación en los tribunales municipales, pero en los tribunales provinciales lo limita a casos de encarcelamiento prolongado o de pena capital.

Presos y detenidos por motivos políticos

El gobierno ha seguido negando que retenga a ningún preso político y no acepta que las asociaciones humanitarias internacionales y las Naciones Unidas tengan acceso a sus presidios. Aunque en 2010 el gobierno invitó al Relator Especial de las Naciones sobre torturas y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes para que efectuara una misión investigadora, esa misión aún no ha ocurrido. Según el relator especial Manfred Nowak, su visita no se ha llevado a cabo porque el gobierno no ha respondido a su solicitud de que la misma se programe.

El gobierno ha liberado a decenas de presos políticos durante el año, por lo general a condición de que partieran al exilio en España.

Sin embargo, en los presidios aún quedaban presos políticos pacíficos, entre ellos cuatro que habían sido detenidos y condenados durante el año. En el año han disminuido apreciablemente

los presos políticos pacíficos pero su número exacto no es fácil de averiguar. La falta de transparencia gubernativa y la infracción sistemática de las garantías legales oscurece la índole auténtica de los procesamientos y las investigaciones penales, de forma que las autoridades pueden enjuiciar y condenar a los defensores de los derechos humanos por delitos comunes o peligrosidad. El gobierno señala con la sigla CR (“contrarrevolucionario”) a los reclusos que considera opuestos al régimen pero no divulga su número. El gobierno ha seguido negando el acceso a las cárceles a los inspectores independientes que pudieran contribuir a determinar el tamaño de la población de presos políticos.

Según informes de los propios presos políticos, a estos se les tiene a menudo incomunicados mucho tiempo, años incluso. A los presos políticos se les negaban las protecciones que se otorgan a otros presos y detenidos. En particular, con frecuencia se les negaba la pronta libertad bajo palabra o el traslado a cárceles de reclusión menos rigurosa, ventajas que se concedían con más facilidad a los otros presos. A los presos políticos se les negaban por lo general las visitas a la familia, las clases en la cárcel, las llamadas telefónicas y a veces, las visitas de la familia. Algunos presos políticos se negaban a llevar el uniforme de los reclusos. Aunque las autoridades carcelarias solían castigar esa desobediencia, muchos presos han informado que a la larga solían autorizarlos a llevar la ropa que prefirieran.

Muchos reclusos han podido comunicar información sobre sus condiciones de encarcelamiento por medio de llamadas telefónicas a los observadores de los derechos humanos o de conversaciones con sus familiares.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Hay tribunales civiles a los niveles municipales, provinciales y de la Corta Suprema, los cuales tratan de asuntos civiles, administrativos, laborales y económicos. Los tribunales civiles, como todos los tribunales del país, no cuentan con una judicatura independiente ni imparcial ni ofrecen garantías eficaces de procedimiento. Aunque es legalmente posible pedir desagravios judiciales por medio de los tribunales civiles por la infracción de resoluciones administrativas, varios abogados han observado que la ineficacia general de los procedimientos y de la burocracia a menudo demora o socava el cumplimiento de las resoluciones administrativas y de los mandamientos de los tribunales civiles. Ningún tribunal permite que se entablen pleitos por infracciones de los derechos humanos.

f. Interferencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia

La constitución dispone la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia de los ciudadanos. La policía debe tener una orden de allanamiento firmada por un fiscal o juez antes de entrar en el domicilio o efectuar el registro. En realidad, la policía solía leer sistemáticamente la correspondencia y otras comunicaciones entre ciudadanos, vigilaba sus movimientos y entraba en las casas sin autoridad jurídica e impunemente. Además, la policía entraba en los hogares y confiscaba efectos personales sin contar con la documentación exigible legalmente.

El MININT empleaba un sistema de informadores y de comités de vecinos para vigilar a los opositores e informar de sus actividades. Los agentes de la Dirección General de la Seguridad del Estado, adscrita al MININT, hostigaban y vigilaban de vez en cuando a los periodistas y diplomáticos extranjeros, por ejemplo, por medio de la vigilancia electrónica y del allanamiento subrepticio de sus viviendas.

El gobierno empleaba continuas campañas de propaganda en los medios de información (todos ellos de propiedad del Estado) para calumniar a los opositores al régimen. Durante el año, el gobierno ha televisado una serie de “documentales” para mancillar la reputación de las Damas de Blanco, los blogueros independientes y los masones, entre otros. En los programas aparecían secuencias de reuniones privadas, tomadas algunas de ellas en dormitorios y habitaciones de hoteles sin el conocimiento de los participantes y utilizadas sin su consentimiento.

El Partido Comunista (PC) es el único partido político reconocido legalmente y el gobierno reprimía activamente cualquier intento de constituir otros partidos. No hacía falta ser miembro del Partido para conseguir los servicios comunes del gobierno, como los artículos racionados, la vivienda o la asistencia médica. No obstante, el gobierno alentaba a la movilización política de las masas y favorecía a los que la practicaban activamente, especialmente cuando se trataba de conceder prestaciones públicas valiosas, como el acceso a la enseñanza superior, las becas y los empleos.

Sección 2. Respeto por las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. La libertad de expresión y de prensa

Condición de la libertad de expresión y de prensa

La constitución establece la libertad de expresión y de prensa mientras esté conforme a los fines de la sociedad socialista. Las leyes que prohíben que se critique a los dirigentes del gobierno y se reparta propaganda antigubernamental, castigan esos actos con penas de tres meses a quince años de reclusión.

Libertad de expresión: El gobierno toleraba muy poco la crítica pública de los funcionarios o programas oficiales. Incluso los personajes destacados de la cultura se exponen a represalias si hacen declaraciones que puedan entenderse como críticas del gobierno. El pintor Pedro Pablo Oliva fue expulsado de la Asamblea Provincial de Pinar del Río, su región natal, y su estudio se clausuró temporalmente tras haber criticado al gobierno en una entrevista con una publicación extranjera. Se restringía el debate público de las cuestiones que se consideraban delicadas. Durante el año, los agentes de la seguridad del Estado hostigaron continuamente a los organizadores de un foro independiente para debatir cuestiones culturales y sociales, y los obligaron a dejar de tratar de cuestiones polémicas. Según los organizadores, hubo visitas de los agentes de seguridad, se instaló vigilancia por video fuera del local y algunos de sus expertos fueron detenidos el mismo día en que tenían prevista su participación.

En el transcurso del año, las agrupaciones religiosas han informado de que habían tenido más libertad que antes para expresar opiniones en los sermones y las reuniones de carácter religioso,

aunque la mayoría de clero se reprimía deliberadamente. Sin embargo, en algunos casos los jerarcas religiosos han criticado al gobierno y su política e incluso a los dirigentes principales, sin represalias. En septiembre, la Iglesia Católica inauguró un centro cultural en La Habana donde se han celebrado debates en los que los participantes han expresado opiniones diferentes sobre el porvenir del país; se ha permitido la participación de algunos disidentes conocidos.

Libertad de prensa: El gobierno poseía directamente todos los medios informativos impresos o de radio o televisión, y no permitía ninguna independencia de la redacción. Las noticias y los programas eran casi iguales en todos los medios de información. El gobierno también ha controlado casi todas las publicaciones y las imprentas de la prensa, y ha obligado a que, antes de publicarse cualquier material, éste tenga la aprobación del PC.

Las notas en la internet, por ejemplo, las de blogueros y periodistas independientes, no se censuraban. Algunos periodistas también publicaban boletines en papel. Como les ocurría a los otros críticos del gobierno, los blogueros y periodistas independientes también sufrían el hostigamiento persistente del gobierno.

La Iglesia Católica tenía dos publicaciones periódicas que algunas veces reprobaban las normas socioeconómicas oficiales. La Iglesia Católica está autorizada a difundir mensajes de Navidad y de Pascua por las estaciones estatales. El gobierno también ha permitido la radiodifusión de un mensaje el 8 de septiembre, la fiesta de la Virgen de la Caridad, la patrona del país. El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), la asociación de iglesias protestantes autorizada por el gobierno, ha sido autorizado a presentar un programa mensual de radio de dos horas de duración.

Violencia y hostigamiento. El gobierno no reconoce el periodismo independiente y los que lo ejercen se exponen a arresto, hostigamiento, confiscación de equipo y amenazas de encarcelamiento. Por lo menos 25 de los presos políticos que el gobierno liberó en 2010 y los primeros tres meses de 2011 habían trabajado de periodistas independientes antes de su encarcelamiento en 2003. En el año, el gobierno ha televisado una serie de “documentales” de propaganda, uno de los cuales se proponía desacreditar a los periodistas independientes; en éste se desenmascaró a un periodista independiente muy conocido que pretendía haber colaborado durante años con el servicio de seguridad del estado.

La censura o restricción del contenido.: La ley prohíbe la distribución de material impreso que se considere “contrarrevolucionario” o crítico del gobierno. En general no se encuentran revistas ni diarios extranjeros. Los que distribuían material de contenido político, lo cual se consideraba tan ampliamente que incluía la Declaración Universal de Derechos Humanos, fueron hostigados y, en algunos casos, detenidos. El gobierno ha seguido interfiriendo en las transmisiones de Radio Martí y Televisión Martí.

El gobierno a veces ha impedido que las bibliotecas independientes reciban donaciones del exterior y se ha incautado de material que les habían donado gobiernos o personas del exterior. El gobierno también se ha incautado de cámaras fotográficas de los opositores para impedir que repartan fotografías y videos que consideraban indeseables, como los tomados durante las detenciones.

Libertad de la internet

El acceso a la Internet está bastante restringido por el gobierno. Han llegado numerosos informes de que el gobierno vigila el correo electrónico así como la exploración y las salas de charla de la internet. El gobierno controlaba todo el acceso a la internet, a excepción de unos servicios muy limitados que facilitaban unas pocas representaciones diplomáticas y el mercado negro.

En el año, el gobierno anunció que había montado una línea de fibra óptica con Venezuela, capaz de ofrecer el servicio de banda ancha pero advirtió que la misma no aumentaría el acceso a la internet de la población en general. Si bien el gobierno afirmaba que el 15,9 por ciento de la población tiene acceso a la internet, en muchos casos ese acceso se reducía a una “intranet” sólo para Cuba que tenía únicamente servicio de correo electrónico o una reducidísima conexión con la *web* mundial.

El gobierno sólo ha concedido acceso a la internet a un grupo muy selecto, formado principalmente por funcionarios, profesionales establecidos, profesores, estudiantes, periodistas y artistas. Los demás sólo podían tener cierto acceso a los servicios de correo electrónico e internet por medio de las asociaciones juveniles patrocinadas por el gobierno o de los centros de internet aprobados y regulados por el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones.

El gobierno empleaba hasta mil blogueros para desacreditar a la oposición, incluso a los pocos blogueros independientes y a las Damas de Blanco. En una charla en el MININT que se ha filtrado al exterior, un funcionario explicó que los blogueros del gobierno llevaban a cabo tareas específicas, entre ellas, las de atacar cuanto escribiera la bloguera independiente Yoani Sánchez.

Las autoridades examinaban las exploraciones por internet de los usuarios autorizados, examinaban y censuraban los correos electrónicos, empleaban filtros de búsqueda de internet e impedían el acceso a las páginas de la *web* que consideraban indeseables. Sin embargo, durante el año el gobierno dejó de obstruir varios sitios muy conocidos de internet, entre ellos, el de Yoani Sánchez.

Muchos grupos de defensa de los derechos humanos manifestaron que las autoridades emplean patrullas móviles para hallar equipo no autorizado de internet y de televisión por satélite. Cuando la policía descubre a los infractores, los multa y a veces los encarcela y se incauta del equipo. Si bien la ley no fija penas específicas por la utilización de la internet sin autorización, es ilícito poseer una antena parabólica para tener acceso sin censura a la internet.

También son ilícitos el uso de programas informáticos de encriptación y la transferencia de documentos cifrados. A pesar de las restricciones de acceso, el hostigamiento y las deficiencias de la infraestructura, los blogueros asiduos son cada vez más numerosos y a menudo insertan críticas del gobierno; para ello con frecuencia cuentan con la ayuda de sus simpatizantes en el exterior, los cuales muchas veces instalan y mantienen los sitios de esos blogs en la red. El acceso desde Cuba a casi todos esos sitios de la internet está prohibido.

Los extranjeros tenían derecho a comprar tarjetas de acceso a la internet del proveedor nacional de telecomunicaciones y a utilizar los centros de negocios de los hoteles, donde el acceso a la

internet sólo se podía adquirir en divisas. El acceso solía costar de cinco a diez pesos convertibles (de \$5,40 a \$10,80 en dólares estadounidenses) por hora, tarifa que resultaba prohibitiva para la mayoría de la población. A los ciudadanos cubanos se les solía permitir el acceso a la internet del proveedor nacional y utilizar los centros de negocios de los hoteles, pero a veces ese acceso les estaba prohibido.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno limitaba las libertades académicas y controlaba los planes de estudio de todas las escuelas, colegios y universidades, y destacaba la importancia de robustecer “la ideología revolucionaria” y “la disciplina”. La mayor parte de los docentes se abstenía de reunirse con extranjeros, entre ellos, diplomáticos, periodistas y profesores, a menos que tuvieran la previa aprobación del gobierno. Los que estaban autorizados a viajar al extranjero se daban cuenta de que al regresar a Cuba, si sus actos se habían considerado políticamente negativos, se exponían a consecuencias negativas para sí y para sus familiares.

Los artistas y docentes que hablaban francamente a menudo sufrían críticas y hostigamientos organizados por el gobierno. Los blogueros del régimen denunciaron a Pablo Milanés, dos veces ganador de los Premios *Grammy* (otorgados anualmente en los Estados Unidos a los personajes más destacados de la música) y antiguo diputado en la Asamblea Nacional, después de que hiciera unas declaraciones públicas en las que lamentaba la hostilidad gubernamental hacia los disidentes cubanos. Esteban Morales, catedrático de la Universidad de La Habana y comentarista de televisión, fue expulsado del PC por publicar un artículo en el cual explicaba las dificultades que planteaba la corrupción administrativa. Apeló y fue reintegrado a su cargo en julio.

Las bibliotecas públicas exigían que se cumpliera el trámite de la inscripción para tener acceso a los libros o a la información. Ese acceso podía denegarse si el solicitante no demostraba que necesitaba consultar la biblioteca a la que se dirigía. Para consultar libros o materiales censurados, delicados o poco comunes era necesario tener la carta pertinente del empleador o de una institución de enseñanza superior.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión

Aunque la Constitución concede ciertos derechos de reunión y de asociación, los condiciona a que no “se ejerzan contra la existencia y los objetivos del Estado Socialista”. La ley obliga a que se pida autorización para organizar reuniones de tres personas o más; la infracción de esa disposición se castiga con reclusión máxima de tres meses y multa, aunque en la realidad esas reuniones se suelen tolerar. Las asociaciones religiosas informan que pueden reunir a grandes grupos sin inscribirlos ni exponerse a sanciones. Se permitió a la Iglesia Católica la celebración del 400° aniversario de la Virgen de la Caridad con una serie de procesiones públicas en honor de ella que tuvieron lugar durante todo el año.

Los opositores políticos se enfrentaban a mayores obstáculos y la policía a menudo reprimía los intentos de reunión, aunque fuera en residencias particulares y en pequeños números. El

gobierno seguía organizando a las turbas para que atacaran y dispersaran algunas reuniones pacíficas. Aunque el gobierno insistía en que esas turbas eran espontáneas, los participantes a menudo llegaban en vehículos oficiales o los alistaban los dirigentes locales del PC de las escuelas o los lugares de trabajo cercanos. Las turbas llegaban y salían por turnos, vociferaban lemas y cantos revolucionarios y se mofaban durante horas de las víctimas de la protesta. A menudo las turbas organizadas por el gobierno atacaban a las víctimas o dañaban sus viviendas o bienes. Los agentes del gobierno que estuvieran presentes no detenían a los que atacaban físicamente a las víctimas ni atendían a las quejas de éstas. En más de una ocasión, los funcionarios también golpeaban a las víctimas.

El gobierno no concedió autorización para ninguna manifestación en su contra ni aprobó las reuniones públicas de ningún grupo defensor de los derechos humanos. Aunque el gobierno toleraba los desfiles públicos de las Damas de Blanco en La Habana después del desfile dominical, las turbas disolvían los desfiles planificados por las Damas de Blanco para otros lugares.

Según las asociaciones de la sociedad civil, se ha seguido suprimiendo el derecho de reunión. El 24 de noviembre, fueron detenidos varios destacados activistas afrocubanos para evitar que participaran en una conferencia de tres días patrocinada por el Comité Ciudadano por la Integración Racial, de carácter independiente. El 25 y 26 de noviembre, los agentes de la seguridad del Estado impidieron la entrada al sitio de la conferencia, con lo cual la misma no pudo tener lugar como se había previsto. El gobierno recurría a menudo a las medidas de fuerza para dispersar las reuniones pacíficas, y muchas veces se ha valido de las turbas para atacar a los participantes en los acontecimientos que quería perturbar.

Según los activistas de los derechos humanos, a menudo el gobierno vigila e interrumpe los servicios telefónicos celulares y alámbricos antes de determinados acontecimientos planificados o de aniversarios importantes vinculados a los derechos humanos.

Libertad de asociación

El gobierno ha negado casi siempre a la población la libertad de asociación y no reconoce a las asociaciones independientes. La Constitución proscribía toda entidad política que no esté reconocida oficialmente. Las autoridades nunca han reconocido a una asociación independiente de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, funcionan en calidad de ONG varias asociaciones independientes, algunas profesionales entre ellas, sin reconocimiento legal.

Las iglesias reconocidas, la asociación humanitaria católica Cáritas, la masonería y varias asociaciones fraternas y profesionales fueron las únicas asociaciones que funcionaban legalmente fuera de la estructura establecida del Estado, el PC y las asociaciones organizadas por el gobierno. Aun estos grupos estaban bajo la vigilancia de la Oficina de Asuntos Religiosos del PC, que tiene la facultad de negar permisos para celebrar actos religiosos y que procura influir sobre los jerarcas religiosos.

Las autoridades han seguido desoyendo las solicitudes de reconocimiento jurídico de grupos nuevos, entre ellos, varios grupos religiosos así como los de defensa de los derechos de la mujer

y de los homosexuales, con lo cual sus afiliados se exponen a acusaciones de asociación ilícita. En 2009, un grupo independiente de abogados, la Asociación Jurídica Cubana (AJC), pidió un mandamiento judicial para que se tramitara su solicitud de reconocimiento legal. En abril, la Corte Suprema resolvió que la AJC tenía derecho a que se tramitara su solicitud de reconocimiento y ordenó al Ministerio de Justicia a que lo hiciera. En junio, ese Ministerio expidió un certificado a la AJC en el que declaraba que en el país no había una asociación equivalente, lo cual es el primer paso en el trámite de inscripción.

El gobierno ha seguido dando trato preferente a los que participan activamente en las funciones del PC y en las manifestaciones de apoyo de las masas al gobierno, especialmente mediante la concesión de prestaciones valiosas, como el ingreso a la enseñanza superior, becas u oportunidades de empleo.

c. Libertad de culto

Sírvase consultar el *Informe Internacional sobre la Libertad de Culto* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/drl/irf/rpt.

d. Libertad de circulación, personas desplazadas en el país y protección de los refugiados y apátridas

La libertad de circulación por el país está muy restringida, así como los viajes al exterior y la emigración con derecho de retorno.

El gobierno limita estrictamente los viajes por el interior del país y el extranjero, así como la emigración interna de las zonas rurales a La Habana.

Circulación en el país: La Constitución permite a todos los ciudadanos viajar a cualquier parte del país, pero los cambios de residencia estaban muy restringidos. Las comisiones municipales de vivienda y las autoridades provinciales deben autorizar todos los cambios de residencia. Cualquiera que resida ilegalmente pudiera ser objeto de multa y devuelto a su lugar de procedencia. Aunque este reglamento tiene validez en todo el país, donde más frecuentemente se aplicaba ha sido en La Habana. Eran miles los que vivían ilegalmente en La Habana, sin acceso a las raciones alimenticias ni al documento de identidad de la ciudad. En ciertos casos, la policía ha amenazado con enjuiciar por “peligrosidad” a cualquiera que regresara a La Habana después de haber sido expulsado. En noviembre, el gobierno mitigó las restricciones a las migraciones internas y autorizó a los familiares “ilegales” de los residentes inscritos en La Habana a que se legalizaran y cambiaran oficialmente su lugar de residencia a La Habana.

Según la ley, las autoridades pueden impedir que una persona vaya a ciertas partes del país o que salga de ellas durante un período de uno a diez años. Esta disposición también se aplica a cualquiera cuya presencia en algún lugar determinado se considere “peligrosa socialmente”. Algunos disidentes han informado que a veces las autoridades los detenían si pretendían salir de su provincia o los devolvían si llegaban a salir.

Los viajes al exterior: El gobierno restringía la emigración y los viajes temporales al exterior mediante el requisito de los permisos de salida. Hacia fines de año, el gobierno comenzó a autorizar a los presuntos emigrantes a que vendieran sus casas y vehículos antes de partir, en lugar de tener que entregárselos al gobierno.

El gobierno ha autorizado la salida a la mayoría de los que tenían derecho a la condición de inmigrante o de refugiado en otro país. Sin embargo, a no menos de 200 ciudadanos que tenían documentos de viaje extranjeros se les negaron los permisos de salida durante el año. Se solía negar el permiso de salida al personal médico, los varones en edad militar, el antiguo personal militar o de seguridad y los opositores. El gobierno exigía a los graduados universitarios a cumplir hasta cinco años de servicio social antes de que se los autorizara a salir del país. El gobierno denegaba los permisos de salida durante varios años a los parientes de los que habían emigrado ilegalmente (por ejemplo, a los tripulantes de la marina mercante y a las personalidades del deporte que habían desertado mientras estaban fuera del país). El gobierno a menudo retenía las visas de salida de los disidentes y de los personajes públicos independientes.

Durante el año, el gobierno ha denegado visas de salida a la bloguera Yoani Sánchez, con lo cual el total de esas negativas en los últimos cuatro años asciende a no menos de 18.

Emigración y repatriación: Según informes de los que solicitaban emigrar legalmente, estos se exponían a interrogatorios de la policía, multas, registros del domicilio, hostigamiento e intimidación, lo que incluía la pérdida involuntaria del empleo. A veces, se despedía a los empleados del gobierno que solicitaban emigrar a los Estados Unidos en cuanto se conocían sus proyectos.

Las tarifas por concepto de exámenes médicos, permisos de salida, pasaporte e impuestos aeroportuarios sólo se pagaban en divisas y representaban aproximadamente 630 pesos convertibles (unos \$680) por persona adulta, o cerca de tres años de salario. Esas tarifas significaban grandes privaciones, sobre todo para los emigrantes que habían sido despedidos de sus empleos y no tenían ingresos.

La ley prevé penas de prisión de hasta tres años y multas de 300 a 1.000 pesos (aproximadamente, de \$12 a \$42) por salidas desautorizadas, casi todas las cuales ocurrían por mar. En realidad, a la mayoría se les multaba y detenía durante dos o tres semanas, salvo a los desertores militares o policiales, en cuyo caso el castigo podía ser más severo. Las condenas de reclusión también eran corrientes para los que intentaban fugarse a los Estados Unidos a través de la Estación Naval estadounidense de Guantánamo.

Conforme al Acuerdo Migratorio de 1994 entre los Estados Unidos y Cuba, el gobierno cubano convino en no enjuiciar ni tomar represalias contra los emigrantes que fueran devueltos de aguas internacionales o estadounidenses o de la Estación Naval estadounidense de Guantánamo tras tratar de emigrar ilegalmente, siempre y cuando no hubieran cometido otro delito. Sin embargo, en la realidad algunos de los repatriados conforme al Acuerdo Migratorio han sufrido hostigamiento y discriminación, por ejemplo, multas, expulsión de los centros educativos y pérdida del empleo.

El gobierno solía negarse a aceptar a sus propios nacionales cuando se los devolvía del territorio de los Estados Unidos pero fuera de los límites fijados por el Acuerdo de 1994.

A veces, el gobierno también aplicaba la ley contra la trata de persona a los posibles emigrantes que organizaban o promovían las salidas ilícitas del país o incitaban a ellas. La ley prevé pena de reclusión de dos a cinco años para los que organizan o promueven la salida ilícita del territorio nacional o incitan a la misma. Según los cálculos de la CCDHRN, al final del año había unas 300 personas encarceladas o en espera de juicio por acusaciones de trata de personas.

Protección de los refugiados

Concesión de asilo: La Constitución dispone que se conceda asilo a las personas perseguidas por sus ideales o por cometer determinados actos de motivación política. El gobierno no dispone de un mecanismo oficial para tramitar la concesión de asilo a extranjeros.

Protección temporal: En los pocos casos de extranjeros que solicitaban asilo, el gobierno ha colaborado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras asociaciones humanitarias para facilitarles protección y asistencia mientras se procuraba establecerlos en un tercer país. Además, el gobierno ha permitido la permanencia en el país de algunos estudiantes extranjeros que temían se les persiguiera si retornaban a su país al final de los estudios, mientras se investigaran sus alegaciones.

Sección 3. Respeto por los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

Los ciudadanos no tienen derecho a cambiar de gobierno, y el gobierno reprimía a los que abogaban por el cambio político pacífico.

Las elecciones y la participación política

Las elecciones recientes: Los 614 candidatos a diputado de la Asamblea Nacional que se presentaron a las elecciones de 2008 habían sido acreditados de antemano por organismos oficiales y no tenían oposición. A su vez eligieron por unanimidad a Raúl Castro como sucesor de su hermano en los cargos de Jefe de Estado y Presidente.

Los partidos políticos: Todos los candidatos a cargos electivos tenían que haber sido acreditados antes de las elecciones por unas comisiones dirigidas por el gobierno, las cuales rechazaban a los candidatos independientes sin explicación ni derecho de apelación. De los 614 candidatos, sólo siete no eran miembros del Partido Comunista.

En las elecciones municipales de 2010, se negó sumariamente la oportunidad de presentarse a decenas de candidatos. Algunos candidatos independientes consiguieron presentarse pero todos fueron derrotados en votación abierta y sin secreto.

Participación de las mujeres y las minorías: La participación en el gobierno de las mujeres y las minorías no está restringida oficialmente, y el gobierno la promueve activamente. El presidente

(y primer secretario del Partido Comunista) Castro ha destacado que entre los miembros del Comité Central recién elegido había 48 mujeres (el 42 por ciento) and 36 afro cubanos (el 31 por ciento). Después de la selección de la Asamblea Nacional en 2008, el gobierno informó que su composición era aproximadamente la siguiente: un 63 por ciento de blancos, 20 por ciento de negros y 17 por ciento de raza mixta.

Sección 4. La corrupción oficial y la transparencia del gobierno

La ley prevé la imposición de sanciones penales por corrupción y las acusaciones de corrupción preocupan sumamente al gobierno y a menudo lanza campañas para reprimirla. Todos los organismos del gobierno, especialmente la Contraloría General de la República y el MININT tenían órdenes de combatir la corrupción, incluso por el enjuiciamiento de funcionarios. En el curso del año, más de una decena de funcionarios de alto nivel y empresarios destacados fueron juzgados y condenados por corrupción. Las sospechas sobre la corrupción de la policía están muy extendidas. Son frecuentes los informes acerca de casos en los que la policía se aprovechaba de los registros de viviendas o vehículos para sustraer bienes o para pedir sobornos a cambio de no multar ni detener al inquilino o propietario.

La ley prevé penas de tres a ocho años de reclusión por “enriquecimiento ilícito” de las autoridades o de los empleados del gobierno.

Los funcionarios no están sujetos a ninguna ley especial que les obligue a revelar sus finanzas personales. La ley estipula el acceso público a la información oficial pero, en la realidad, las solicitudes de información solían rechazarse automáticamente.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de las supuestas infracciones de los derechos humanos

El gobierno no reconocía a los grupos internos de derechos humanos ni les permitía funcionar lícitamente. Varias asociaciones de defensa de los derechos humanos seguían funcionando fuera de la ley, entre ellas, la CCDHRN, el Movimiento Cristiano de Liberación, la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil y la Fundación Lawton de Derechos Humanos. El gobierno reprimía a los defensores cubanos de los derechos humanos mediante la intimidación y el hostigamiento.

No hay ONG independientes reconocidas oficialmente que vigilen los derechos humanos. El gobierno se ha negado a reconocer a toda ONG de vigilancia de los derechos humanos que no esté autorizada y a reunirse con ella.

Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. El gobierno ha seguido denegando a las asociaciones defensoras de los derechos humanos, a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los presos y detenidos.

Organismos del gobierno para la defensa de los derechos humanos. En el país no había organismos oficiales independientes que vigilaran las posibles infracciones de los derechos humanos.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad o condición social. No obstante, la discriminación social era frecuente.

Mujeres

Violación y violencia doméstica. La ley penaliza la violación, incluida la violación en el matrimonio, y el gobierno la hace cumplir. En el año, el gobierno no ha divulgado estadísticas sobre los arrestos, enjuiciamientos o condenas por violación y no se dispone de información fiable sobre la frecuencia de la misma.

La ley no reconoce la violencia doméstica como una categoría específica de violencia pero prohíbe amenazar o causar lesiones, incluidas las debidas a la violencia doméstica. Las penas por violencia figuran en las leyes contra la agresión, que van desde multas hasta condenas de prisión de diferente duración, según la gravedad del delito.

Con el fin de luchar contra la violencia doméstica, durante el año el gobierno ha seguido realizando campañas en los medios informativos. Se han debatido los asuntos de la mujer, entre ellos, la violencia doméstica, en dos programas semanales de televisión. Además, unas pocas asociaciones organizadas por el gobierno han celebrado conferencias y colaborado con diversas comunidades para mejorar los servicios que prestan. El UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha informado que el gobierno tiene centros de asistencia para mujeres y niños en la mayoría de los municipios, y que el personal está preparado para ayudar a las víctimas de los malos tratos.

Acoso sexual. La ley prevé sanciones por acoso sexual que van de tres meses a cinco años de posible reclusión. El gobierno no ha divulgado estadísticas acerca de los arrestos, enjuiciamientos o condenas por delitos de acoso sexual o afines.

Derechos de reproducción. Las parejas, así como cada persona, tienen derecho a decidir el número, el espaciamiento y la oportunidad del nacimiento de sus hijos, y contaban con la información y los medios para hacerlo, libres de toda discriminación. Hubo fácil y extenso acceso a la información sobre anticonceptivos y asistencia calificada en el momento del parto y después del parto. Según informe de 2011 del *Population Reference Bureau* (servicio de investigaciones demográficas, institución privada estadounidense) el 73 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad empleaba métodos contraceptivos modernos. Las mujeres y los hombres tenían acceso igual a los servicios de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Discriminación. A las madres trabajadoras la ley les concede acceso preferente a bienes y servicios. La ley establece la igualdad de derechos entre mujeres y hombres con respecto al matrimonio, el divorcio, la crianza de los niños, la manutención del hogar y la dedicación a una carrera. A las madres que trabajan la ley otorga acceso preferencial a bienes y servicios. La ley

estipula igualdad de pago por igualdad de trabajo, y por lo general las mujeres recibían pago comparable al de los hombres por trabajo similar.

Menores de edad

Registro de nacimientos. La ciudadanía se deriva de haber nacido en el territorio del país; los nacimientos se solían inscribir sin demora.

Maltrato infantil. No se ha manifestado ninguna tendencia social al maltrato infantil.

Explotación sexual. Aunque han llegado informes sobre la prostitución de menores, no se conocen estadísticas confiables acerca de su alcance. La edad mínima de consentimiento sexual es de 16 años. No hay ley de estupro pero el castigo por violación aumenta a medida que disminuye la edad de la víctima. La ley no prohíbe específicamente la pornografía infantil pero proscribire la producción o distribución de toda clase de material gráfico obsceno, con sanciones que oscilan entre tres meses a un año de prisión, más multa.

El gobierno, en cooperación con el gobierno británico y una ONG de esa nacionalidad, ha seguido administrando centros en La Habana y Santiago dedicados al tratamiento de los menores víctimas del abuso sexual, incluida la trata. En abril se inauguró un tercer centro en la ciudad de Santa Clara. En estos centros se emplean técnicas modernas, entre ellas, la de preparar a los menores para que atestigüen en enjuiciamientos penales.

Sustracción internacional de menores. El país no es Parte en la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores de 1980. Para obtener información al respecto para países específicos, sírvase consultar en http://travel.state.gov/abduction/country/country_3781.html donde figura el informe anual del Departamento de Estado.

Antisemitismo

A la comunidad judía del país pertenecían entre 1.000 y 1.500 personas. No han llegado informes de actos antisemitas.

Trata de personas

Sírvase consultar el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip.

Personas con discapacidades

No se conoce ninguna ley que prohíba la discriminación oficial contra los discapacitados en el empleo, la educación, el acceso a la asistencia sanitaria o la prestación de otros servicios del Estado. Sin embargo, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concede a los discapacitados el derecho a oportunidades iguales de empleo y a pago igual por igual trabajo. La ley no obliga a que los edificios, las instalaciones de comunicaciones o la información estén

accesibles a dichas personas. En la realidad, esos servicios e instalaciones raras veces resultaban accesibles a los discapacitados.

La Dirección de Enseñanza Especial del Ministerio de Educación ha estado a cargo de la educación y formación de los niños discapacitados. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estado a cargo del Programa de Empleo para las Personas con Discapacidades.

En enero de 2010 por lo menos 26 pacientes murieron de hipotermia y malnutrición en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, en La Habana, administrado por el Estado, cuando las temperaturas bajaron casi al punto de congelación. Algunos empleados del hospital habían vendido en el mercado negro los alimentos, medicinas y cobijas de los pacientes. El 31 de enero de 2011, un tribunal condenó a 14 personas, entre ellas al que había sido director del hospital, a penas de reclusión de hasta 15 años por su culpabilidad en esos fallecimientos.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

El gobierno promueve activamente la integración y cohesión de las razas. Pese a esos esfuerzos, los afrocubanos sufrían a menudo de discriminación racial, por ejemplo, los paraban con frecuencia desproporcionada para verificar su identidad y registrar sus pertenencias, o eran objeto de epítetos raciales. Los afrocubanos también residían con frecuencia desproporcionada en los vecindarios donde estaban las peores viviendas y se encontraban desfavorecidos económicamente.

El país ha celebrado el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes y para ello se ha organizado una serie acontecimientos culturales en los que se destacan los aportes afrocubanos y se presentan conferencias de profesores sobre el racismo y la discriminación.

Maltrato social, discriminación y actos de violencia motivados por la orientación sexual y la identidad de género

Oficialmente, no hubo discriminación por la orientación sexual en el empleo, la vivienda, la falta de nacionalidad o el acceso a la educación o a la asistencia médica. Sin embargo, persistía la discriminación social por la orientación sexual o la identidad de género.

Mariela Castro, hija del Presidente, dirigía el Centro Nacional de Educación Sexual y seguía promoviendo abiertamente los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los transgénicos y los bisexuales. Sin embargo, los defensores independientes de los derechos humanos afirmaban que el gobierno no ha hecho lo bastante para acabar con el hostigamiento de esos grupos de personas.

Otras formas de violencia social o de discriminación

Han llegado informes de que algunos pacientes del VIH/SIDA han sufrido de discriminación en el empleo o han sido rechazados por sus familias. El gobierno administra cuatro cárceles exclusivamente para reclusos que sufren de VIH/SIDA. Algunos cumplían condena por

“propagar una epidemia”. No solía haber dietas ni medicamentos especiales para los pacientes de VIH.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva

Aunque la ley reconoce el derecho de asociación, lo restringe seriamente porque sólo permite la existencia legal de una confederación sindical, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Todo grupo sindical debe pertenecer al CTC para funcionar lícitamente. La ley no contempla el derecho de huelga y en lugar del derecho a la negociación colectiva, establece un procedimiento complicado para llegar a acuerdos colectivos. La Organización Mundial del Trabajo ha seguido formulando objeciones acerca de las restricciones a la negociación de acuerdos colectivos, en particular que las autoridades gubernamentales y los directivos de la CTC siempre tienen la última palabra en la aprobación de esos acuerdos.

El gobierno ha seguido procurando evitar la formación de sindicatos independientes en todos los sectores. Los directivos de la CTC los ha designado el Partido Comunista. La función principal de la CTC consistía en administrar las relaciones del Gobierno con los trabajadores. La CTC no negociaba colectivamente ni promovía los derechos de los obreros ni defendía el derecho de huelga. La CTC fue el organismo principal que difundió el plan del gobierno de despedir a un gran número de los empleados del Estado y que defendió la adopción de esa decisión por el gobierno. Los directivos de la CTC, al manifestarse a favor de esos despidos, declararon que “nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas y servicios con plantillas infladas; ya no será posible la fórmula de proteger o subsidiar indefinidamente los salarios de los trabajadores”.

Varios pequeños sindicatos independientes funcionaban sin reconocimiento jurídico, entre ellos, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, la Confederación Nacional de Trabajadores Independientes de Cuba, y el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. En abril estas tres asociaciones se fundieron en una, la Coalición Sindical Independiente de Cuba. Estas asociaciones estaban sometidas al hostigamiento de la policía y a la infiltración por agentes del gobierno y no podían hacer mucho por representar eficazmente a los obreros ni para promover sus intereses.

El gobierno puede decidir si un trabajador “no es apto para trabajar”, lo que tiene como consecuencia la pérdida del empleo y la denegación de la oportunidad de trabajar. La decisión de no considerar a alguien apto para trabajar depende de sus creencias políticas, lo que comprende, por ejemplo, negarse a pertenecer al sindicato oficial o intentar salir del país ilegalmente. También se castigaba a los profesionales que se mostraban interesados en emigrar. De los 75 disidentes encarcelados en 2003, siete eran dirigentes sindicales independientes; todos ellos han sido puestos en libertad durante los últimos dos años.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe la esclavitud, la servidumbre obligatoria y demás formas del trabajo forzoso. El gobierno aplica eficazmente esa ley y no han llegado informes de que ocurrieran esas formas del trabajo. En el curso del año, el gobierno abolió oficialmente los programas que obligaban a los jóvenes a trabajar durante el verano.

Sírvase consultar también el informe del Departamento de Estado en la internet sobre la trata de personas: *Trafficking in Persons Report* en www.state.gov/j/tip.

c. Prohibición del trabajo infantil y la edad mínima de empleo

La edad mínima de empleo es de 17 años, aunque el código laboral autoriza el empleo de menores de 15 y 16 años, para capacitarlos o para compensar escaseces de mano de obra. El código laboral no permite que los menores de 15 y 16 años trabajen más de siete horas diarias ni más de 40 horas semanales ni en días feriados. Los jóvenes de 13 a 18 años de edad no pueden trabajar en ciertas ocupaciones peligrosas específicas, como la minería, ni de noche.

No se conoce ningún programa oficial que impida el trabajo infantil o que retire a los niños de ese trabajo. Los programas contra la inasistencia escolar contribuían a que los niños estuvieran en la escuela y no en algún empleo. Las inspecciones y penas resultaban suficientes para hacer cumplir la ley; en realidad, trabajaban en el país muy pocos menores de 17 años.

d. Condiciones aceptables de trabajo

El salario mínimo mensual estaba fijado en 225 pesos (unos \$9). El salario mínimo no se aplicaba al pequeño sector no estatal. El gobierno complementaba el salario mínimo con la educación gratuita, la asistencia médica subvencionada (la paga diaria se reduce en un 40% después del tercer día de estancia en un hospital), la vivienda y algunos alimentos. Sin embargo, aun con los subsidios, el gobierno reconocía que el salario medio de 448 pesos al mes (aproximadamente, \$19) no bastaba para sostener un nivel de vida razonable.

La semana laboral normal es de 44 horas, pero es más corta en ocupaciones peligrosas como la minería. La ley dispone para los trabajadores un período semanal de descanso de 24 horas, más 24 días feriados y pagados al año. Esas normas se aplicaban a los trabajadores del Estado y a los del pequeño sector no estatal (pero no a los trabajadores por cuenta propia). La ley no prevé mayor pago por concepto de horas extraordinarias ni prohíbe las horas extraordinarias obligatorias pero éstas se suelen limitar a 12 por semana o a 160 por año. Sin embargo, la ley contempla pocas razones para que un obrero se niegue a trabajar horas extraordinarias. Negarse a hacerla pudiera dar lugar a que aparezca una anotación al respecto en el expediente laboral del empleado, lo cual pondría en peligro la aceptación de sus solicitudes posteriores de vacaciones. El Ministerio de Trabajo estaba autorizado a fijar otros límites a las horas extraordinarias obligatorias que se podían trabajar por año, según fuera necesario. La remuneración por horas extraordinarias se pagaba en efectivo al jornal horario normal o se pagaba mediante el aumento de las horas de asueto, particularmente para los obreros dedicados directamente a la producción o a la prestación de servicios; estas normas no son válidas para el personal de gerencia.

Hay leyes relativas a la seguridad de los puestos de trabajo y del medio ambiente. La ley establece que el trabajador que considere que su vida está en riesgo por condiciones peligrosas tiene derecho a negarse a trabajar en ese puesto o a participar en ciertas actividades específicas hasta que ese riesgo se haya eliminado. El obrero, sin embargo, sigue obligado a trabajar temporalmente en cualquier otro empleo que se le asigne y con la remuneración que disponga la ley.

El Ministerio de Trabajo hacía cumplir eficazmente las normas sobre el salario mínimo y las horas de empleo, y para ello se vale de sus delegaciones a los niveles provinciales y municipales. Sin embargo, el gobierno carecía de mecanismos para que se acataran las normas sobre la seguridad y salud en el empleo.

Los obreros se han quejado a menudo de que la remuneración por horas extraordinarias no se les pagaba o se les pagaba con atraso. El gobierno sigue ampliando la lista de oficios que se pueden ejercer en el sector privado, el número de los cuales ha aumentado a 181. Por primera vez, los trabajadores por cuenta propia han quedado autorizados a contratar mano de obra. Algunas empresas extranjeras funcionaban en un número restringido de sectores, por ejemplo, hostelería, turismo y minería. Esas empresas funcionaban como operaciones conjuntas; en ese caso, el gobierno contrataba y pagaba a los empleados en pesos, pero ese desembolso del gobierno representaba tan solo una pequeña fracción de lo que dichas empresas remitían al gobierno por concepto de costos laborales. Se prohíbe que estas empresas contraten o paguen directamente a sus trabajadores, aunque al parecer los pagos furtivos complementarios eran frecuentes.

La Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que era autónoma pero ilegal, ha notificado numerosas infracciones de las leyes sobre salud y seguridad en los lugares de trabajo de todo el país, entre ellas, las que regulaban las deficiencias y el mal estado de conservación de la maquinaria y el equipo de protección. La CTC rara vez informaba a los trabajadores de sus derechos y no atendía ni asistía a los obreros que se quejaban de las condiciones peligrosas en el trabajo.